

ITALIA

LA REANUDACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

Desde primeros de septiembre, Mario Monti ha decidido dar un golpe de acelerador a la agenda para el crecimiento, convocando a los agentes sociales a varias reuniones e invitándoles a reanudar el diálogo social. El principal objetivo es llegar, por la vía de la negociación, al aumento de la productividad en las empresas, “en el ámbito del marco predispuesto por el Gobierno con las nuevas iniciativas para el crecimiento y las reformas estructurales destinadas a la mejora de la competitividad”.

La primera cita ha sido la del 5 de septiembre con las principales patronales italianas, con ocasión de la presentación del documento "Italia y el futuro del euro y de la Unión Europea. Las propuestas de las empresas italianas". Los sindicatos (CGIL, CISL, UIL y UGL) fueron recibidos el día 11.

La aceleración del diálogo social solicitada por Monti responde, según fuentes del Gobierno, a dos exigencias: a nivel interno, dar señales alentadoras para evitar otro “otoño caliente”; a nivel europeo, asegurar a los partners que Italia no tiene intención de reducir su compromiso sobre las reformas.

En la reunión del 11 de septiembre con los sindicatos Monti les ha solicitado que afronten el problema de la baja productividad en Italia. Según el Primer Ministro, “mientras que Grecia, España, Irlanda y Portugal han aumentado la productividad y han disminuido los costes laborales, Italia no la ha mejorado y los costes laborales han empeorado” por lo que pide un esfuerzo a los agentes sociales para cambiar esta situación con los medios que tienen a su disposición.

Contestando a esta invitación Giorgio Squinzi, presidente de Confindustria, y Susanna Camusso, líder de CGIL mantuvieron una primera reunión el día 20 para empezar a hablar de un posible acuerdo social para mejorar la productividad de la empresa italiana.

Al final de la reunión, Squinzi ha declarado que “entre empresas y sindicatos existen espacios para poder llegar a una posición común” sobre el tema de la productividad, como ha solicitado el Primer Ministro. “Me estoy entrevistando con todos los líderes de los sindicatos, así como con todos los líderes políticos” ha afirmado el Presidente de la mayor patronal italiana. “Todavía no hemos entrado en lo vivo, pero creo que hay espacios para llegar a una posición común, que lleve hacia la justa dirección”. Squinzi ha confirmado “tiempos breves” para un acuerdo.

Ha sido más frío el comentario de Camusso después de la entrevista con Squinzi: “Ha sido una reunión como tantas que se hacen; seguimos trabajando, pero por ahora no hay ninguna noticia”.

El doble problema del ILVA de Taranto

La fábrica de acero ILVA de Taranto, que este verano se ha convertido en el símbolo de la lucha entre dos derechos fundamentales (salud y trabajo) y que actualmente está bajo secuestro en el ámbito de una encuesta por desastre ambiental, deberá reducir drásticamente las emisiones contaminantes. Lo da a conocer una nota del Ministerio del Ambiente, como conclusión del grupo de trabajo ad hoc instituido por el Ministro Clini, quien ha asegurado que la denominada “Autorización Integrada Ambiental” (AIA) en la que su Ministerio está trabajando es “un documento claro y explícito, que definirá con precisión las responsabilidades de todas las partes implicadas, cada una por sus competencias”.

Mientras tanto han continuado las protestas por parte de los trabajadores, después de que el Juez ha rechazado el plan de la empresa para evitar que se apaguen las instalaciones. Ha seguido a ultranza la huelga convocada por FIM-CISL y UILM (a la que son contrarios FIM-CGIL y el "Comité de ciudadanos y trabajadores libres y pensantes") y, en coincidencia con la conferencia para la presentación de la AIA, que será a mediados de octubre, FIM y UILM han convocado una gran manifestación de todo el grupo ILVA "para el futuro de la siderurgia italiana", en Roma.

La protesta ha seguido también dentro de la fábrica, por parte de grupos de obreros encaramados en varias torres de la fábrica y dispuestos a seguir con su huelga de hambre, con la esperanza de que "se tomen decisiones en defensa del ambiente y de nuestro puesto de trabajo".

Quienes se adhieren al "Comité de ciudadanos y trabajadores libres y pensantes" han bloqueado los medios de transporte del ILVA en la entrada y en la salida del establecimiento en correspondencia con la portería C, destinada a acoger las mercancías. Según el Comité, del que forman parte los que el 2 de agosto impidieron el mitin sindical de Camusso (CGIL), Bonanni (CISL) y Angeletti (UIL), "los obreros no deben bloquear la ciudad, pero sí la empresa y su producción".

También se han registrado protestas en Génova, donde hay otro establecimiento ILVA, cuya actividad está estrictamente ligada al de Taranto. Unos 300 obreros afiliados a FIM y UILM se han manifestado, el día 28, cerrando carreteras y provocando graves problemas al tráfico.

El Ministro de Desarrollo, Corrado Passera, ha informado que el coste de un eventual cierre del ILVA de Taranto tendría un impacto negativo que ha sido valorado en más de 8.000 millones de euros al año. De todas formas, ha añadido que "el empeño en tener en vida las instalaciones no justifica, en cualquier caso, el mantenimiento de situaciones de riesgo ambiental y para la salud de los trabajadores y los ciudadanos".

Según datos del Servicio Sanitario Regional de Apulia, en el primer semestre de 2012 se ha registrado en Taranto un drástico aumento de hospitalizaciones por tumores, concretamente un 50% más que en el primer trimestre del año pasado.

La crisis de ALCOA, en Cerdeña

Ha seguido en el mes de septiembre también el dramático conflicto entre obreros y empresa comenzada en agosto. A primeros de mes tres obreros se encaramaron a lo alto de un depósito de agua, a 70 metros de altura, hasta la reunión entre sindicatos, la multinacional estadounidense propietaria de las instalaciones y el gobierno regional sardo.

Alcoa mantiene su intención de cerrar las instalaciones y argumenta que el alto coste de la energía eléctrica, de las materias primas y unas instalaciones obsoletas hacen poco rentable mantenerla en funcionamiento.

Los afectados por el cierre fueron convocados por la asamblea de trabajadores a movilizarse una vez al día hasta el domingo, día 9, cuando aproximadamente 500 de ellos han viajado, junto a otros habitantes de la zona, rumbo a Roma para protestar frente al Ministerio de Desarrollo Económico.

Precisamente, el titular de esa cartera, Corrado Passera, señaló que, aunque están buscando posibles soluciones, la "situación es casi imposible y la empresa de escasísimo

interés para posibles inversores", unas declaraciones que originaron protestas de los sindicatos mayoritarios y el presidente de la región, Ugo Cappellacci.

Se ha convocado para el 2 de octubre una reunión en la sede de la Región con sindicatos, CONFAPI, Confindustria y Alcoa para examinar la cuestión de los "amortiguadores sociales".

«Tras una primera reunión con la cumbre sindical regional», ha subrayado el Asesor regional de Trabajo, Antonello Liori, «he decidido convocar otra reunión ampliándola a la empresa y a las asociaciones patronales para tratar en profundidad algunos aspectos que han surgido, sobre todo en relación con los trabajadores de empresas satélites y empresas de trabajo temporal».

«Es prematuro hablar de amortiguadores sociales, en plena negociación para la compra de la empresa», ha añadido, «pero queremos estar preparados para cualquier eventualidad, incluida la de una posible solicitud de los beneficios previstos por ley. Como confirmación, por si fuera necesario, de que el problema de Alcoa está a la cabeza de las emergencias de la Región».

El conflicto en Sicilia

Desde el 21 de septiembre los obreros de SINA Service, que no han obtenido la renovación de la contrata para la manutención de la refinería ISAB de Priolo (Siracusa, en Sicilia), han puesto bajo asedio el establecimiento bloqueando las entradas e impidiendo el abastecimiento de carburante.

La controversia afecta, como explica en una nota unitaria FIOM, FIM e UILM de Sicilia, a unos 200 trabajadores, pero se corre el riesgo que su protesta afecte a toda Sicilia, con bloqueos en la red de distribución de carburante en todo el territorio regional, con posibles fuertes repercusiones en agricultura, navegación e industria.

Los sindicatos, según se lee en la nota, "exigen respuestas concretas sobre los compromisos que quieren asumir las refinerías para garantizar los actuales niveles de empleo y dar una rápida solución a una controversia que corre el riesgo de implicar, con su carga de exasperación y desesperación a todos los demás trabajadores".

El coordinador regional de la Asociación de refinerías "ASSOPETROLI" de Sicilia, Luciano Parisi ha declarado que "aun compartiendo las razones de los trabajadores, agravadas por la crisis económica, consideramos necesaria y urgente la intervención de las instituciones regionales para desbloquear cuanto antes las instalaciones consintiendo la regular reanudación de la actividad de la refinería y de las miles de empresas que trabajan con ella".

Pero sindicatos y trabajadores están dispuestos a seguir con su protesta: "En este clima de incontenible recurso a la "Cassa Integrazione" o, peor aún a los despidos", sigue diciendo la nota de FIM, FIOM y UILM, los trabajadores e Sina Service mantendrán los piquetes hasta que no se encuentren soluciones que garanticen sus derechos".

El caso FIAT

Desde hace tiempo, con la caída de las ventas de automóviles, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de las fábricas en Italia. Recientemente la dirección ha descartado el cierre pero sin aclarar sus planes de inversión por lo que el Gobierno y los sindicatos están preocupados por las posibles pérdidas de puestos de trabajo del mayor empleador del país.

La Ministra de Trabajo, el día 22 se reunió, junto al Primer Ministro Monti, con el directivo de la Fiat, Sergio Marchionne, para despejar dudas sobre los planes de inversión de la empresa en Italia, y, posteriormente con los sindicatos para escuchar su opinión sobre la situación y el futuro de la empresa en Italia.

La reunión con los sindicatos no ha tenido éxito ya desde antes de celebrarse ya que de los tres sindicatos más representativos, dos de ellos, CISL y UIL, han rebajado su representación a los responsables del sector, mientras que sí ha asistido la secretaria general de la Cgil. La reunión ha desilusionado a los sindicatos ya que no se les ha dicho nada que no supieran y la han calificado de reunión inútil. En todo caso, los sindicatos se han manifestado públicamente en contra de las ayudas económicas del Gobierno a la empresa.

Durante más de una semana, el Gobierno italiano había intentado en vano obtener una respuesta sobre los planes de la empresa automovilística italiana, después de que se supiera que su proyecto para invertir 20.000 millones de euros hasta 2014 había quedado descartado. Sergio Marchionne, el consejero delegado, guardaba silencio en su despacho de Detroit, mientras los 20.000 trabajadores del grupo automovilístico fundado en Turín hace un siglo se temían lo peor. Al tiempo que la polémica crecía en Italia, Marchionne aprovechó un viaje a Brasil del ministro italiano de Desarrollo Económico, Corrado Passera, para recordarle que de los 2.300 millones de euros que Fiat invertirá en su nueva fábrica del Estado brasileño de Pernambuco, el 85% tendrá financiación pública. "Al ministro no se le pasará por alto", dijo el jefe de Fiat, "que el Gobierno brasileño presta especial atención a los problemas de la industria del automóvil". Dos días después, Marchionne se sentaba frente a Monti en Roma.

De la reunión, que se celebró durante cinco horas en la sede del Gobierno, no salió nada en claro. O al menos nada que se hiciera público. Marchionne, que acudió acompañado por el Presidente de FIAT, John Elkann, (nieto de Giovanni Agnelli, fallecido en 2003), pactó con Monti la creación de un grupo de trabajo y la promesa de que "Fiat se quedará en Italia". Pero ni uno ni otro dijeron a qué precio.

John Elkann ha asegurado que el grupo cerrará este año con un incremento de su beneficio a nivel mundial, a pesar de que el mercado en Italia ha retrocedido a niveles de hace 40 años. Elkann defiende la estrategia impulsada por el Consejero Delegado de la compañía, Sergio Marchionne, de reducir el lanzamiento de nuevos modelos en Europa. "Hoy en día no tenemos ningún problema de naturaleza económico-financiera, gracias al crecimiento de la actividad del grupo Fiat-Chrysler en todo el mundo".

El mismo Marchionne, en una conferencia de la industria en Turín, a finales de septiembre, ha pronosticado que el mercado automovilístico europeo no se recuperará al menos hasta el año 2015. "El mercado europeo es un desastre. Ha caído por un precipicio y no parece que por el momento haya tocado fondo. Según Marchionne, la corporación italiana está en una encrucijada. "La elección es reducir la capacidad de producción y despedir a miles de empleados, o intentar utilizar nuestra capacidad, nuestro conocimiento de los productos y los procesos, la tecnología de nuestras plantas para vender en otros países", expuso. Políticos y sindicalistas italianos temen que Fiat reduzca sus inversiones en el país para concentrar su actividad industrial en el extranjero. Tras la alianza con Chrysler, dos terceras partes de los beneficios proceden de Estados Unidos.

Los pronósticos no son muy optimistas", manifestó Marchionne, dos días después de reunirse con el primer ministro italiano, Mario Monti. Precisamente el propio Monti ha aclarado que en ese encuentro, el primer ejecutivo de Fiat no pidió la puesta en marcha de

un plan de ayudas para la corporación. "No se solicitó ayuda financiera y, si se hubiera solicitado, no se habría concedido", añadió.

A pesar de ello, las quejas en clave dramática de Marchionne son vistas en Italia como el prelude de una petición en firme de ayuda económica al Gobierno. Y hay quien, como el líder del centro, Pierferdinando Casini, prefiere anticipar un no rotundo: "Italia ya ha dado a Fiat todo lo que debía. Ahora debe ser la empresa quien responda al compromiso contraído con el país y con los trabajadores". El problema es que si el Gobierno diera cualquier tipo de ayuda, la cola de peticiones sería larga.

Huelga y manifestación de los empleados públicos

El 28 de septiembre se ha realizado una huelga general de los trabajadores de las Administraciones Públicas, convocado por los sindicatos CGIL y UIL, con una manifestación, en Roma que se ha cerrado con un comicio de los líderes de ambos sindicatos, Susanna Camusso y Luigi Angeletti. La CISL no ha participado en la huelga.

Por las calles de la capital italiana ha habido grandes protestas contra los recortes de Monti, previstos en la "*spending review*". "Basta ya con golpear a los más débiles. Ya hemos dado" era el eslogan de la protesta de los trabajadores que han llegado de varias partes de Italia.

El Ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi ha declarado que, aun respetando las posiciones de todos, "estamos haciendo una operación importante, la de reorganizar las Administraciones Públicas y ver cuales son sus necesidades óptimas: por ello quisiera que no se autoexcluyera nadie, sobre todo las organizaciones de trabajadores. Con muchas de ellas la mesa está abierta, espero que también los otros, los que van a la huelga, alcancen la mesa".

Por su parte, la Secretaria General de CGIL, Susanna Camusso, ha replicado que "no estamos frente a una operación de recortes del despilfarro o a la reforma de las Administraciones Públicas, sino a recortes lineales que se reflejan sobre los servicios a los ciudadanos". Y en cuanto a la hipótesis de un Monti-bis, responde que tiene la sensación de que "el país no consigue construir alternativas para salir de la crisis".

Luego desde el escenario, Camusso ataca al Ejecutivo: "Mientras aumenta el desempleo la única política del Gobierno son los despidos" dice, mientras que "defernder y crear empleo es la receta para salir de la crisis".

La líder de CGIL sostiene que hay que cambiar la "*spending review*", que la reforma de las pensiones "no ha sido una gran prueba académica", habiendo dejado colgados a muchos prejubilados y que "si se quiere el bien de los ciudadanos no se puede seguir recortando la sanidad y multiplicando los nombramientos políticos".

La CGIL no tiene intención de abandonar la negociación puesta en marcha en el Ministerio de la Función Pública. "Al Ministro que se pregunta si después de la huelga habrá una mesa", concluye Camusso, "le decimos que ha sido él quien ha abandonado la mesa cuando ha anulado el acuerdo alcanzado".

También ha sido muy crítico con el Ministro el Secretario de UIL, Luigi Angeletti, que ha afirmado que el sindicato ha bajado a la calle "para ir contra el proyecto del Gobierno de recortar de manera horizontal el empleo en la Administración Pública, a pesar de las bonitas palabras sobre productividad y eficiencia en los servicios". Sobre las respuestas solicitadas a los sindicatos, Angeletti es escéptico: "No nos parece que el Gobierno escuche el buen sentido".

Según los organizadores participaron en la manifestación más de 30.000 personas.